

Hacienda plantea crear un fondo para sostener los servicios públicos en las crisis

J. SÉRVULO GONZÁLEZ, Madrid
Las comunidades ya tienen en su poder el informe que el comité técnico del Consejo de Política Fiscal ha realizado sobre la reforma del sistema de financiación. El documento, de 55 páginas, contiene la postura de la Administración General del Estado sobre las principales propuestas vertidas por las

autonomías. Entre ellas, la creación de un fondo de reserva para mantener los servicios públicos fundamentales (sanidad, educación y servicios sociales) en épocas de crisis. Existe un claro consenso entre las comunidades para obtener más recursos para prestar estos servicios mercedados por la crisis, pero el Estado no garantiza más fondos.

El documento que el Ministerio de Hacienda ha enviado esta semana a las comunidades no es la propuesta definitiva que esperan los presidentes autonómicos para desbloquear la reforma de la financiación. Es el resumen que la Administración General del Estado (AGE), controlada por Hacienda, ha hecho sobre las ocho reuniones que los directores generales autonómicos han mantenido para esclarecer el rumbo de la reforma del sistema de financiación. Y en ese análisis, Hacienda lanza algunas propuestas, no muy concretas, entre la que sobresale la creación de un fondo de reserva que se nutriría de recursos durante las épocas boyantes para que ayude a sostener los servicios públicos fundamentales en las épocas de crisis. No obstante, el ministerio subraya que la creación de este colchón anticíclico "podría presentar algunas dificultades". En lo que coinciden todos, comunidades y Administración del Estado, es en que "la sostenibilidad del Estado de Bienestar constituye uno de los pilares a considerar en la definición del sistema de financiación".

Uno de los asuntos que más preocupan a los técnicos del ministerio y de las comunidades es el gasto sanitario y las prestaciones de la dependencia. La Autoridad Fiscal ha advertido en diferentes foros de las tensiones sobre el gasto sanitario, que crecen cerca de un 5% anual, según calcula. Los avances tecnológicos, el envejecimiento de la población y el aumento de enfermedades cróni-



El ministro Cristóbal Montoro, ayer en el Congreso. / J. ROJAS

cas por la mayor esperanza de vida explican la tendencia.

Los representantes regionales proponían mejorar la población ajustada—con la que se calcula el coste del servicio y que tiene en cuenta los rangos de edad, la población envejecida y otros factores como la dispersión geográfica—y hacer un análisis específico del gasto sanitario. Hacienda, por su parte, aplaza este debate al señalar que debe ser "objeto de estudio durante el periodo de vigencia del próximo modelo con vistas a determinar si debe ser revisada para un mejor ajuste".

Las comunidades han recibido con decepción este informe por que apenas sobrevuela sobre algunos puntos en los que mayor consenso había, como la nivelación

total de las competencias homogéneas. Es decir, que se financien de forma equitativa todos los servicios comunes.

Algunas autonomías creen que detrás de este informe está la intención del Gobierno de posponer el Consejo de Política Fiscal, que Rajoy había programado para este mes de mayo. Creen que el Ejecutivo ha entendido que no podrá cerrar un acuerdo con las comunidades si no pone más recursos sobre la mesa y la situación presupuestaria no permite esa maniobra. Además, existe otro problema de fondo que es la situación catalana. La Generalitat siempre ha liderado este debate pero ahora está a otras cosas. Y sin los catalanes, una reforma parece imposible.

La Airef no se cree el plan económico que el Gobierno envió a Bruselas

Escolano se reafirma en que el déficit será inferior al 3% y el PIB subirá un 2,7%

J. S. G. / Í. DE B., Madrid
El dibujo presupuestario que España envió a Bruselas con la senda económica para los próximos tres años no convence a la Autoridad Fiscal (Airef). El organismo encargado de velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas cree "improbable" que se cumpla ese escenario presupuestario del Ejecutivo reflejado en el Programa de Estabilidad 2018-2021 y remitido a Bruselas para comprometer las medidas con las que combatirá el déficit y reducirá deuda pública.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal advierte de que el Ejecutivo infravalora los gastos públicos. "Es muy improbable que se realice la reducción del gasto del 2,4% del PIB prevista en la actualización del programa de estabilidad", explica en el informe publicado ayer. La Airef cree que "las medidas contempladas en el proyecto de Presupuestos y las incorporadas en el trámite parlamentario dificultan dicho resultado". Se refiere a la última subida de las pensiones del 1,6% para este año y el 1,5% para 2019, a raíz del acuerdo entre el PP y el PNV para conseguir el apoyo de los nacionalistas vascos a los Presupuestos que aún se tramitan en el Congreso y que el Ejecutivo calcula que tendrán un coste de 3.700 millones.

Además, la subida del sueldo a los funcionarios será más gravosa de lo que calcula el Ejecutivo, según la Autoridad Fiscal. La pasada primavera, Hacienda cerró un acuerdo con los sindicatos representantes de la función pública para subir el sueldo de los funcionarios alrededor de

un 8,5% en los tres próximos años. El coste de esta mejora retributiva, que se vincula al crecimiento del PIB y la reducción del déficit, es "muy superior" a lo calculado por el Ejecutivo, según la Airef. Esta institución recuerda que la medida afectará a todos los empleados públicos.

En este contexto, la Airef considera "improbable" cumplir con la senda de déficit para el periodo 2018-2021, "disminuyendo la probabilidad a medida que avanza el periodo". El Gobierno espera rebajar el déficit 3,2 puntos de PIB hasta 2021. Y pasar de un agujero equivalente al 3,1% en 2017 a un superávit del 0,1% en 2021. La mayor parte del ajuste procede de la reducción del gasto (2,4 puntos). "Algo que resulta muy improbable", dice la institución, que pronostica que los números rojos serán un punto de PIB (unos 12.000 millones) al año superior de lo que dibuja el Gobierno.

El ministro de Economía, Román Escolano, pareció responder a las dudas de la Airef, aunque no la citó. Aseguró que el cuadro macroeconómico "es realista, prudente y creíble". Escolano dijo que el déficit público quedaría por debajo del 3% y que el PIB crecerá un 2,7% en el año. Por otro lado, afirmó que el Gobierno llevará al Congreso el proyecto de ley de Mifid II (sobre transparencia y protección del inversor) en julio próximo. La transposición va con retraso ya que en Europa entró en vigor en enero. También avanzó que se creará un área de pruebas para productos tecnológicos, *sandbox*, para el sector financiero.

Los sindicatos exigen "aumentos de choque" de los salarios más bajos

MANUEL V. GÓMEZ, Madrid
Los sindicatos llevaron ayer la exigencia de aumentos salariales significativos, "especialmente en los sueldos más bajos", hasta la misma puerta de la patronal CEOE en toda España. Allí exigieron "aumentos salariales de choque que permitan subir los salarios más bajos de forma muy importante", reclamó el líder de UGT, Pepe Álvarez, en la concentración madrileña.

A su lado estaba Unai Sordo, secretario general de CC.OO, que en su discurso, reclamó un pacto

salarial con la patronal, "pero no cualquier pacto salarial, uno con contenido". Y de no llegar ese pacto, señaló, "habrá conflicto hasta donde tenga que haber", zanjó.

Entre los asistentes se escuchó algún grito esporádico reclamando una "huelga general". En los discursos se ha hablado mucho de que si no hay "reparto de la riqueza" habrá un "conflicto creciente". Sin embargo, el tono de los discursos de los líderes sindicales fue menos contundente que en ocasiones anteriores, como en el Primero de Mayo.



Varios sindicalistas, ayer durante la concentración de UGT y CC OO ante la sede de la CEOE en Madrid. / K. P.